



PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE San Luis Potosí

AÑO XC SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MARTES 10 DE JULIO DE 2007
EDICION EXTRAORDINARIA

S U M A R I O

Poder Legislativo del Estado

Decreto 197.- Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar. Reforma al Código Penal, Reformas y adiciones al Código Civil, ambos del Estado y Adiciones a la Ley de Asistencia Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Decreto 198.- Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

Responsable:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:

C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO

GOBIERNO DEL ESTADO 2003-2009
HECHOS
para servir

Poder Legislativo del Estado

C.P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 197

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, DECRETA:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia constituye hoy día, en nuestro país, una verdadera enfermedad social, cuya extensión alcanza niveles alarmantes. Por desgracia sus manifestaciones más frecuentes se gestan y expresan en su núcleo fundamental y más sensible: la familia. Su desatención y crecimiento sistemático la lacera, la desintegra y, finalmente, la destruye; dejando a sus miembros lesionados en sus integridades, no sólo físicas, sino morales, y psicológicas, y disminuidas en su dignidad humana.

La violencia familiar es el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja, o a las, o los descendientes, y se ejerce por medio del abuso físico, emocional o sexual. El eje central de esta conducta lo constituye la necesidad de ejercer una superioridad, dominio y control sobre otra persona, a través precisamente de agresiones o uso de la fuerza.

La violencia familiar no se limita únicamente a las agresiones que el hombre le infiere a la mujer, o a la inversa, si no que hay además un poder agresivo que cometen la madre o el padre, contra las hijas o hijos, o viceversa, y últimamente se han dado casos en que las o los abuelos son quienes padecen la agresión por parte de los nietos.

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, que se dieron a conocer en ocasión del 2º. Informe del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en el sesenta y dos punto uno por ciento de los casos de maltrato reportados, son las mujeres las víctimas de sus esposos; en el nueve punto nueve por ciento, los hijos son víctimas del padre; en el ocho punto tres por ciento, la víctima es agredida por su

concubino; en el cinco punto cuatro por ciento de la víctima es agredida por su hijo; en el cinco punto tres por ciento la víctima es agredida por su esposa; en el cuatro punto cuatro por ciento la víctima es agredida por su nieto; el dos punto cinco por ciento es agredida por la madre; y uno punto cinco por ciento es agredida por el hermano, mismo porcentaje para las víctimas que son agredidas por sus concubinas.

Concatenado a los datos anteriores, en el Estado, las cifras reunidas en el Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG), con base en las denuncias presentadas a consecuencia de violencia y delitos sexuales, registradas en la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, muestran que de cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro denuncias, el ochenta y siete punto cinco por ciento fue presentada por mujeres, relativas en el diez por ciento de los casos a delitos sexuales, y en el restante noventa por ciento, a casos de violencia familiar.

La atención que requiere la violencia familiar debe considerarse de interés social, y de relevante atención pública, pues sus consecuencias afectan directamente a la sociedad; dada su complejidad puede transformarse en una barrera para el desarrollo socioeconómico, ya que algunos estudios estiman que el abuso sexual y el maltrato físico, disminuyen el ingreso de las mujeres entre un tres y un veinte por ciento, por el impacto sobre el logro educacional y sobre la salud, lo que repercute en su actividad laboral; por tanto, solucionar la requiere del esfuerzo y cooperación interinstitucional de gobierno y sociedad, así como de la aplicación de procedimientos que la atiendan de fondo.

En relación con la medición de la violencia, según cálculos hechos con la metodología AVAD (Años de Vida Ajustados según Discapacidad) utilizada por la OPS (Organización Panamericana de la Salud), en las economías de mercado, para las mujeres de quince a cuarenta y cuatro años que han vivido violencia familiar, representa un año de vida perdido por cada cinco de vida saludable. En este sentido, reconociendo la necesidad imperiosa de coparticipación de las instituciones de salud en el Estado, a esta nueva Ley se incluye la aplicación de la NOM-190-SSA1-1999, (Norma Oficial Mexicana) publicada el 8 de marzo de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, que contempla los Criterios para la Atención Médica de Violencia Familiar, cuyo objetivo es consignar que las instituciones otorguen atención médica a los usuarios con esta problemática, a la vez que notifiquen al Ministerio Público sobre los hechos constitutivos de delitos. Esas obligaciones incluyen clínicas y hospitales privados.

Es la violencia familiar el acto delictivo con mayores índices de impunidad; virtud a que no existe la cultura de la denuncia, derivada de la falta de credibilidad en las instituciones, que al no tener fundamentos legales que justifiquen su actuación en la previsión, seguimiento, sanción y tratamiento, es poca o casi nula su intervención, y además, sin consecuencias jurídicas.

La violencia familiar se ha convertido en un problema de grandes dimensiones, que lesiona sistemáticamente a las mujeres, niñas, niños, adultos mayores, y personas con

discapacidad, destruyendo el núcleo fundamental de la sociedad: las familias; pues este fenómeno se arraiga y es transmitido culturalmente de generación en generación, fundando falsas creencias basadas en el ejercicio de la violencia, como una conducta "natural" del poder. Entregando a la sociedad individuos lastimados, con carencias afectivas, e incapaces de integrarse adecuadamente al medio, y funcionar eficazmente en sus actividades de trabajo y producción. Las actuales generaciones emanadas de una vida con violencia, crecen en el entendido de que ésta es normal; lo cual les impide una sana interacción social y lamentablemente tenderán a repetir en sus propias familias, los patrones educativos y contractuales que les fueron aplicados; convirtiendo este fenómeno en un círculo vicioso.

Se puede afirmar que una sociedad formada en gran parte con personas que tendrán generalmente bajo rendimiento escolar y laboral, como consecuencia de su problemática familiar, no puede tener expectativas sanas de desarrollo, y a ésto se le suma el hecho que la atención institucional no dimensionaba la magnitud del problema social y el impacto económico que al estado genera, desde la prevención hasta la sanción.

Esta Ley es el resultado del compromiso social del estado, y de la atención plena a las convenciones, convenios y tratados internacionales emanados de las resoluciones, declaraciones y acuerdos, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas, y de los organismos especializados, para promover la erradicación de la violencia; la cultura de la equidad entre los géneros; de eliminar cualquier práctica discriminatoria; y velar por el respeto a los derechos de las personas; mismos que al ser ratificados por el estado mexicano, se convierten en una obligación para su cumplimiento.

Se introduce el concepto familias, reconociendo que la conformación actual y real de las mismas, es el espacio donde conviven un grupo de personas con relaciones afectivas, independientemente de los lazos consanguíneos entre sus integrantes, lo cual conserva la esencia, como el lugar privilegiado donde las personas estructuran los rasgos que darán lugar a sus futuras relaciones afectivas, considerando los procesos de relación complejos y difíciles que marcan la estructura psíquica de las personas; la multiplicidad de relaciones reconocidas en el concepto las familias, han sido además, el punto de partida para el estudio de las conductas concebidas en dichas multiplicidades, reconocidas y signadas así por nuestro país en 1994 en el Cairo, en la CIPO (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo).

La Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar o Doméstica en el Estado, que se abroga, establecía las funciones que corresponden a las diversas dependencias del Ejecutivo Estatal, en la prevención, atención y tratamiento de la violencia familiar, llamada en ese ordenamiento "Intrafamiliar o Doméstica". Sin embargo, la experiencia demostró la ausencia de un órgano que planee, coordine y dé sentido, al esfuerzo y tareas que realizan en forma independiente las diversas instituciones para lograr mejores resultados.

Esta tarea requiere por ello, extender la competencia de aplica-

ción de la ley que en la actualidad corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, a los demás poderes y ámbitos del Gobierno del Estado; sumando al cumplimiento del objeto de la ley, funciones y tareas que correspondan al Poder Judicial, y a los municipios de la Entidad. Para ello, este Ordenamiento crea un Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, órgano de carácter honorífico, encargado de definir la política del Estado en este rubro, así como de la planeación, programación, supervisión y evaluación de las acciones y programas que se apliquen en esta materia.

El citado Consejo se integrará, además del Titular del Poder Ejecutivo, por quien sea titular o a quien se designe como representante: del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia; los Servicios de Salud en el Estado; la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; la Procuraduría General de Justicia del Estado; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.

Por otra parte, se actualiza el concepto que define la ley vigente como violencia "intrafamiliar o doméstica", y que puede parecer ambivalente, para unificarlo en uno que engloba todos los supuestos y que se define en esta nueva norma como violencia familiar.

Se define con mayor precisión en qué consisten las acciones en materia de prevención y atención, y cuáles corresponden a cada institución; estableciéndose un procedimiento alterno de resolución de conflicto, que es la conciliación.

Al efecto, se instituyen las Unidades de Atención de la Violencia Familiar, que contarán con personal especializado en las áreas psicoterapéutica, jurídica, médica y de trabajo social, las que se ajustarán normativamente a los lineamientos que señalen el Consejo Estatal y la PRODEM en materia de violencia familiar; estas unidades se encargarán de asistir los casos de violencia familiar, y de aplicar el procedimiento de conciliación que al efecto se establecen en la presente Ley.

Los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán reproducir estas unidades, con personal calificado en las materias antes citadas, para aplicar en forma análoga el citado procedimiento.

Al prevenir, atender y sancionar la violencia familiar que se genera en los hogares de nuestro Estado, se protege la integridad personal y el derecho de cada miembro de las familias, a una vida libre de violencia; pero además, se concretiza la vigencia del artículo 4o. de la Constitución General de la República, en sus párrafos tercero y sexto, en lo que concierne al desarrollo de la familia y la protección de los menores, procurando el cumplimiento del principio de equidad entre el varón y la mujer. Asimismo, se promueve la organización y el desarrollo armónico de las familias, como base fundamental de la sociedad.

Las instituciones garantizarán a la sociedad la prevención y atención, a través del cumplimiento eficaz de la normatividad en la materia, para así atacar de fondo el problema de la violen-

cia familiar, eliminando sus expresiones en nuestra comunidad, erradicándola de la vida colectiva; fortaleciendo la unión de las familias encaminada a obtener un desarrollo personal, social y económico más sano, justo, equitativo y armónico, para quienes conforman la riqueza humana de nuestro Estado.

Esta nueva ley pretende esencialmente, iniciar una nueva etapa de prevención y atención a la violencia familiar, partiendo del reconocimiento de su dimensión y sus consecuencias en la vida social, y de la responsabilidad que corresponde al estado en su combate. Al considerarse un problema de interés general, su propósito es lograr que familia, sociedad, e instituciones, se concatenen y coordinen en forma más congruente y eficaz, para atacar de fondo el problema de la violencia, para reducir sus expresiones en nuestra comunidad, con el fin último de que sea erradicada finalmente de la vida social. Busca, en síntesis, fortalecer la integridad y los valores de las familias, como principio y base del desarrollo personal y de la construcción de un orden social más sano, justo y equitativo para todos.

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de la Relación en los Hogares (ENDIREH), respecto de las mujeres y porcentajes de mujeres con al menos un incidente de violencia familiar, así como las cifras que dan a conocer la Dirección de Asistencia Jurídica, la Subdirección de Asistencia Jurídica y Adopciones en el Programa de Prevención del Maltrato del Menor (PREMAN), las cuales hace públicas el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); al estudio exploratorio en una muestra de 3600 hogares de los municipios de Cuernavaca, Hermosillo y Villahermosa, con personas adultas mayores, en el que obtuvieron como resultado que la comisión de los delitos de violencia familiar han ido en aumento.

Respecto a la iniciativa que presenta el legislador Adrián Ibáñez Esquivel, si bien es cierto que en nuestro sistema penal los delitos se persiguen de oficio, o a petición de parte agraviada; y que los primeros son aquéllos que dañan los intereses de la sociedad o del estado; los segundos son los que perjudican el interés individual; y que la violencia familiar es considerada un problema de salud pública y, por ello, propone que se eleve a la categoría de los delitos que se persiguen de oficio; virtud a que el bien jurídico tutelado es, precisamente, la integridad de la persona humana.

Sin embargo, se considera que en la mayoría de los casos, el generador de la violencia es proveedor de la familia, y que al ser perseguible de oficio este delito, se limita la posibilidad de que las partes en el conflicto puedan solucionarlo a través de la mediación; además, de que al aumentar la pena, tanto de prisión, como pecuniaria, se hace poco probable que el generador de la violencia esté libre para trabajar y proveer aunque sea con poco el sustento de la familia; lo que seguramente acarrearía la inhibición en la cultura de la denuncia.

El aumento de las penas no resuelve la violencia familiar, pero sí disuade su comisión, ya que por ello el delincuente habrá de considerar que además de la pena privativa a la que se puede hacer acreedor, para gozar de la libertad bajo fianza, deberá garantizarla con una cantidad que no es de fácil asequibilidad,

por lo que se considera procedente reformar el párrafo segundo del artículo 177 del Código Penal del Estado, y aumentar la pena de prisión y la sanción pecuniaria.

En lo tocante a iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, que propone reformar la fracción III del artículo 404 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, referente a la pérdida de la patria potestad, al que se agregaría el supuesto de cuando los padres fueran condenados por la comisión de un delito familiar, y en los resultados de los estudios de peligrosidad, ésta sea superior a la media.

En ese sentido, el 24 de abril de 2007, vía escrita, el Consejero Jurídico del Estado, emite opinión respecto a la iniciativa citada en el párrafo que antecede, y manifiesta que coincide con la misma; asimismo, hace acotaciones por las que considera que ésta sería una causal más de pérdida de la patria potestad; por lo que se hace necesario adicionar una fracción VII al artículo en comento, en la cual se contempla precisamente, la causal que propone la legisladora.

Opinión compartida, ya que se trata de dos elementos que habrán de configurar esta causal; primero que se refiere a la comisión del delito de violencia familiar; y, segundo, que en el resultado del estudio de peligrosidad, ésta sea superior a la mínima.

Por lo que atendiendo a la garantía de igualdad entre el varón y la mujer, establecida en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además determina que la ley protege la organización y desarrollo de la familia, la que constituye el núcleo fundamental que integra y cohesiona a la sociedad, para que ésta alcance sus objetivos de permanencia, desarrollo y bienestar, se considera que quien altera a través de la violencia familiar ese núcleo, exponiendo al menor y trastornando su personalidad, resulta contrario a la obligación de los padres de formar moralmente a sus hijos.

Además, la patria potestad debe ejercitarse en tal forma que prepare a los menores a respetar a sus padres; y mal ejemplo habría de darle, si el padre se conduce con menosprecio y violencia hacia la madre del menor, o hacia algún otro miembro de la familia.

Por lo que tratándose de la fracción VI del mismo artículo 404 que se comenta, es de considerarse que en diversas ocasiones los delitos se cometen de forma circunstancial, y cuando se infringe la ley de esta manera, no puede condenarse a un padre o a una madre, a la pérdida de la patria potestad; por ello, el supuesto que se contempla en la fracción VI del artículo 404, quedará en los términos del Libro Sustantivo Penal vigente, en cuya interpretación se concluye que no se refiere a la reincidencia, si no a la condena de dos o más veces por delito grave, cualesquiera que éste sea.

Finalmente, se reforma también la Ley de Asistencia Social, para agregar como sujetos de asistencia social, a las personas que se encuentren en situación de violencia familiar.

ARTICULO 1º. Se expide la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí.

**LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I
Del Objeto de la Ley**

ARTÍCULO 1º. La presente Ley es de orden público e interés social; tiene como objeto prevenir, combatir y erradicar la violencia familiar en el Estado. Al efecto, establece las bases de coordinación y competencia de los servicios con los que cuenta el Estado, instituciones y procedimientos, para la atención de personas receptoras y generadoras de violencia familiar.

La aplicación de la presente Ley tendrá como propósito garantizar los derechos de los integrantes de las familias, a efecto de que éstos no sean restringidos, ni lesionados.

Con este objeto, la unidad, la igualdad de oportunidades, de derechos y deberes de los miembros de la familia, la equidad y la protección de las personas en el núcleo familiar, constituyen principios rectores para la interpretación y aplicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 2º. El Estado y los municipios están obligados a procurar la convivencia armónica de las familias, y a promover su unidad, e instrumentar políticas sociales de prevención, protección y promoción que favorezcan el desarrollo de las personas en el núcleo familiar, en condiciones de libertad, respeto y dignidad, para erradicar patrones estereotipados, comportamientos, así como prácticas sociales y culturales basadas en conceptos discriminatorios por razones económicas, de género, de subordinación o convicciones políticas.

ARTÍCULO 3º. Los integrantes de la familia se encuentran obligados a evitar conductas que generen violencia.

Sus miembros tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y sexual, de manera que no se afecte su sano desarrollo individual y su plena incorporación al núcleo social. Al efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones facultadas, en los términos de las leyes aplicables, que garanticen la atención de referencia.

**CAPÍTULO II
Terminología**

ARTÍCULO 4º. Para los efectos de esta Ley, respecto a los órganos encargados de su aplicación, se entiende por:

I. Consejo Estatal: el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Estado;

II. DIF: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado;

III. Organizaciones sociales: las instituciones legalmente constituidas y registradas, que se ocupan de la materia de

esta Ley;

IV. PRODEM: la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, y

V. Unidades de Atención: las unidades de la administración pública municipal, encargadas de dar atención a las personas receptoras y generadoras de violencia familiar, conforme a la presente Ley; así como de llevar a cabo, el procedimiento de conciliación y la ejecución, en su caso, de las medidas requeridas para hacer cesar y erradicar la violencia familiar.

ARTÍCULO 5º. En cuanto al objeto y sujetos de aplicación de esta Ley, se entiende por:

I. Familia o núcleo familiar: al grupo social, compuesto por dos o más personas relacionadas por el matrimonio, el concubinato, o la unión libre; por los parentescos de consanguinidad, afinidad, o civiles; y que proporciona a sus miembros satisfacción de necesidades, estabilidad y formación;

II. Persona generadora de la violencia familiar: quien realice cualquier acto o incurra en omisión, que constituya maltrato en términos de este artículo, contra quienes tengan algún vínculo de parentesco; estén o hayan estado bajo su guarda o custodia; o mantengan relaciones de hecho similares al matrimonio; o en el núcleo familiar;

III. Persona receptora de la violencia familiar: quien o quienes sufren maltrato en cualquiera de las modalidades que contempla el presente artículo, derivado de acciones u omisiones intencionales de cualquier otro miembro de su familia, y

IV. Violencia familiar: el uso de la fuerza física o moral, o las omisiones que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica, sexual, o las tres, independientemente de que pueda producir o no lesiones, y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato, y que tiene por efecto causar un daño en cualesquiera de las siguientes modalidades de maltrato:

a) Físico: el acto de agresión intencional que cause daño a la integridad de la otra persona, encaminado hacia su sometimiento y control, provocándole cualquier alteración en su salud física o mental.

b) Económico: la conducta omisa consistente en faltar a los deberes de proveer el sustento, el vestido, la vivienda, la educación o la atención de la salud, a los cuales tienen derecho quienes integran una familia y que por su edad, capacidad o particular condición, se encuentren en situación de dependencia.

c) Por afectación económica o patrimonial: el acto u omisión que genere año, destrucción, deterioro, sustracción o retención de bienes muebles o inmuebles, propiedad de la víctima o destinados a la satisfacción de las necesidades familiares.

d) Psicoemocional: el acto u omisión que provoque en quien lo recibe, carencia de autoestima o devaluación del autoconcepto, utilizando como medio de control, la manipulación o el domi-

nio de la persona.

e) Sexual: el acto u omisión que induzca coactivamente a la realización de actos o prácticas sexuales no deseadas, o que generen dolor; así como los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, a que se refiere el Código Penal del Estado, respecto a los cuales la presente Ley, surte efectos en el ámbito de la prevención y de la atención.

f) Verbal: toda manifestación expresa que tenga el propósito de ofender a la persona que deteriore, o haga imposible la vida en familia.

También se considera violencia familiar, cualquier forma de maltrato a las que se refieren los incisos anteriores, si la víctima está bajo tutela, custodia o protección del agresor, aunque no exista parentesco alguno.

Se equiparan a la violencia familiar, los actos u omisiones de cualquier miembro de la familia, tendientes a limitar la capacitación y el trabajo, con el fin de controlar, someter o dominar a algún otro integrante de la misma.

ARTICULO 6º. Para los efectos de esta Ley, respecto a las medidas, instancias y procedimientos, se entiende por:

I. Atención: los servicios de apoyo, asistencia y protección, médicos, pedagógicos, psicológicos, jurídicos y sociales que se brindan con el fin de promover, proteger y restaurar la salud física y mental de las y los receptores de la violencia familiar, así como de quienes la generan;

II. Garantía de protección del receptor de violencia familiar: toda determinación dirigida a garantizar la seguridad, salud y el bienestar físico, mental y emocional de la persona receptora de la violencia;

III. Medidas cautelares: todo mandato expedido por escrito de autoridad competente, para la protección a las personas receptoras de violencia familiar, que señala esta Ley;

IV. Medidas de protección inmediata: la que se ejerce en situaciones excepcionales o de emergencia, determinadas por la gravedad del caso, a fin de salvaguardar la integridad de la persona receptora de violencia;

V. Prevención: las medidas tendientes a evitar que se produzca la violencia familiar en cualquiera de sus modalidades, entre las personas a las que hace referencia el artículo 5º. de esta Ley, y

VI. Conocimiento de hechos: es aquél que hacen los particulares ante las Unidades de Atención, en forma verbal, o por escrito, respecto de la situación de violencia familiar que les afecte, o de la que tengan conocimiento.

CAPITULO III

De las Autoridades e Instituciones Competentes

ARTICULO 7º. En el ámbito de sus atribuciones, la aplicación

de esta Ley corresponde a:

I. El Ejecutivo del Estado, a través de:

a) La Secretaría General de Gobierno.

b) La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

c) La Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

d) La Secretaría de Salud del Estado.

e) Los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

f) La Procuraduría General de Justicia del Estado.

g) La Dirección de Prevención y Readaptación Social.

h) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.

i) La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

j) El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí;

II. Al Poder Judicial del Estado;

III. Al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, y

IV. A los ayuntamientos, por conducto de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

CAPITULO IV

De las Atribuciones de las Autoridades en Materia de Prevención y Atención de la Violencia Familiar

ARTICULO 8º. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno, coadyuvar y apoyar las acciones en la materia de violencia familiar, de conformidad con las atribuciones que le confieran los ordenamientos aplicables.

I. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que trabajen en materia de violencia familiar en el Estado;

II. Proponer la celebración de convenios con las asociaciones de profesionales especializados en la materia y asociaciones, para brindar apoyo gratuito a las personas receptoras y generadoras de violencia familiar;

III. Coadyuvar, a través de la Dirección General del Registro Civil, a la difusión del contenido y alcances de la presente Ley, y en los cursos prematrimoniales que para tal efecto implementen los oficiales del Registro Civil a las parejas que pretendan contraer nupcias, y

IV. Promover, a través de la Coordinación de la Defensoría Social y de Oficio del Estado, la capacitación y sensibilización de los defensores sociales y de oficio, a efecto de procurar la adecuada

atención a las víctimas receptoras de la violencia familiar, que requieran de sus servicios profesionales.

ARTICULO 9º. Corresponde a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado:

I. Desarrollar programas para la prevención de la violencia familiar, con especial atención a la que se ejerce contra las niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las instancias competentes, y promoverlos en cada una de las instituciones educativas, públicas y privadas;

II. Organizar campañas, cursos y talleres de capacitación en materia de prevención y atención de violencia familiar, para el personal de los diferentes niveles educativos;

III. Impartir talleres sobre la observancia en México de los tratados, convenios, acuerdos y convenciones internacionales, en materia de violencia familiar;

IV. Generar políticas educativas en materia de violencia familiar, que modifiquen los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, mediante la educación escolarizada, no escolarizada y mixta;

V. Fomentar y apoyar programas para crear conciencia sobre las consecuencias de la violencia familiar, los problemas derivados de ella, los medios de prevenirla y evitarla;

VI. Sensibilizar a los trabajadores de la educación, para detectar casos de violencia familiar en los centros escolares, con información proveniente de los educandos, y canalizarlos a la dependencia correspondiente;

VII. Llevar registro de los casos de violencia familiar que se detecten en los centros educativos, y del procedimiento de que fueron objeto;

VIII. Promover el establecimiento de programas de prevención de violencia familiar, en las instituciones educativas públicas y privadas de nivel medio superior y superior, y

IX. Las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 10. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional:

I. Contribuir al fortalecimiento de la unidad familiar, con la participación activa y conciente de sus integrantes, en los programas que tiendan a satisfacer sus necesidades básicas y el desarrollo de sus capacidades;

II. Promover programas de prevención de la violencia familiar, en comunidades de escasos recursos, incorporando a la población en la aplicación de dichos programas;

III. Orientar a personas receptoras de violencia familiar, para que reciban atención;

IV. Establecer proyectos productivos, sin estereotipos de géne-

ro, a favor de mujeres que enfrentan problemas de violencia familiar, y

V. Las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 11. En materia de prevención y atención de violencia familiar, las autoridades sanitarias en el Estado, además de la aplicación de la NOM-190-SSA1-1999, tendrán las siguientes facultades:

I. Compete a la Secretaría de Salud:

a) Llevar a cabo programas en materia de educación para la salud, incluyendo salud mental, a fin de prevenir la violencia familiar, en los términos de las leyes aplicables.

b) Diseñar programas de detección y atención a las personas receptoras y generadoras de violencia familiar, en los hospitales regionales, o en los centros de salud ubicados en los municipios.

c) Celebrar convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Cruz Roja, clínicas y hospitales privados, para los efectos de los incisos anteriores.

d) Las demás que establezcan los ordenamientos legales aplicables, y

II. Compete a los Servicios de Salud de San Luis Potosí:

a) Detectar y valorar la sintomatología y alteraciones psicósomáticas, de quienes acudan a recibir atención médica en los hospitales regionales, o en los centros de salud ubicados en los municipios, y, en su caso, canalizar la problemática de violencia familiar a las áreas correspondientes.

b) Fomentar la sensibilización y capacitación del personal médico de los hospitales regionales, centros de salud, órganos dependientes de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, a fin de que proporcionen a los usuarios información para prevenir la violencia familiar.

c) Emitir a las instituciones médicas del sector privado, para que fomenten la sensibilización y capacitación de su personal médico, a fin de que proporcionen a los usuarios información relativa a la prevención de violencia familiar.

d) Promover la cultura de la denuncia para concientizar a la persona receptora de violencia familiar, a fin de que lo haga del conocimiento del Ministerio Público.

e) Fomentar entre el personal de los hospitales públicos y privados, regionales y centros de salud municipales, el conocimiento de la obligación de dar aviso a la autoridad competente, los casos en los cuales se detecte violencia familiar.

f) Sensibilizar a la comunidad del área de influencia de los hospitales regionales, centros de salud y órganos dependientes de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, mediante

programas de difusión, en los que se proporcione información respecto de las medidas de prevención y atención que éstos y otras instituciones ofrezcan, a las personas receptoras y generadoras de violencia familiar.

g) Las demás que establezcan los ordenamientos aplicables.

ARTICULO 12. Además de las que le señalen los ordenamientos legales aplicables, en materia de prevención de la violencia familiar, la Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá coadyuvar con las autoridades competentes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y ejecutar las acciones que le sean propias, a través de las áreas correspondientes.

Asimismo, proporcionará al Consejo Estatal, la información estadística sobre casos de violencia familiar de los que tenga conocimiento.

ARTICULO 13. Corresponden a la PRODEM, las siguientes atribuciones:

I. Otorgar asistencia jurídica en materia de violencia familiar, que soliciten los receptores de la misma, así como la asistencia psicológica o social dirigida a los distintos miembros de la familia involucrados en la violencia;

II. Recibir quejas, reportes o informes sobre cualquier conducta que atente contra los menores, realizar las investigaciones correspondientes y hacer valer los derechos de los mismos ante la autoridad que corresponda;

III. Investigar sobre la existencia de cualquier manifestación de violencia en agravio de menores, personas adultas con o sin discapacidad y senectos; en su caso, lo hará del conocimiento del Ministerio Público;

IV. Recabar el registro estadístico acerca de la violencia familiar que se genere, en las instancias involucradas en materia de violencia familiar;

V. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público, en los casos en que se vea involucrado cualquier integrante del núcleo familiar, como persona receptora;

VI. Solicitar al Agente del Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional competente, su intervención en aquéllos asuntos en los que por el ejercicio de la patria potestad de los padres o de quien la ejerza, se ponga en peligro la vida, la salud, la seguridad o la integridad de los menores sujetos a ella, debiendo en casos urgentes, dictar las medidas necesarias para preservar la vida, la salud física y mental, así como la seguridad e integridad de las personas receptoras de violencia familiar;

VII. Velar porque los menores u otras personas receptoras de violencia familiar, obtengan provisional o definitivamente, albergue seguro;

VIII. Realizar investigaciones para detectar las causas de violencia familiar y generar los esquemas de atención pertinentes, a través de diversos mecanismos de difusión comunitaria;

IX. Remitir a las autoridades competentes, los informes o constancias que soliciten, en los casos relacionados con la problemática de violencia familiar, y

X. Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 14. Corresponde al Instituto de las Mujeres del Estado:

I. Coadyuvar en la erradicación de la violencia familiar;

II. Diseñar campañas para la promoción de respeto a los derechos humanos, que garanticen el respeto entre los integrantes de la familia, y que permitan erradicar la violencia familiar;

III. Coadyuvar en la difusión de los derechos de la familia;

IV. Proporcionar servicio de asesoría legal y contención emocional, de manera personal y mediante línea telefónica de emergencia, a personas receptoras de violencia familiar, así como a terceras personas que tengan conocimiento de dicha violencia;

V. Remitir a las Unidades de Atención, los casos de violencia familiar que sean de su conocimiento, y

VI. Las demás que les confieran los ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 15. Corresponde a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, aplicar los programas de prevención en materia de violencia familiar; así como la aplicación de los modelos de tratamiento en esta materia, a las personas generadoras de violencia familiar que se encuentren en rehabilitación.

ARTICULO 16. Corresponde a los ayuntamientos del Estado:

I. Impartir cursos y talleres de prevención y atención de la violencia familiar, a su personal y a la población de su municipio, así como la difusión de la presente Ley;

II. Impulsar en el ámbito de su competencia, reformas a la reglamentación municipal que coadyuve en la prevención y atención de la violencia familiar, y

III. Crear por lo menos una Unidad de Atención.

TITULO SEGUNDO DE LOS ORGANISMOS DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO

CAPITULO I Del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar

ARTICULO 17. Se crea el Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en el Estado, como órgano honorífico, responsable del apoyo normativo, consulta, seguimiento,

evaluación y coordinación con los organismos facultados, para la realización de las tareas y acciones en materia familiar.

ARTICULO 18. El órgano rector del Consejo Estatal será una Junta de Gobierno, que se integrará por el titular o el representante que designen, las siguientes entidades y dependencias:

- I. El Titular del Poder Ejecutivo, o quien designe, lo presidirá;
- II. El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado;
- III. La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia;
- IV. Los Servicios de Salud en el Estado;
- V. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado;
- VI. La Procuraduría General de Justicia del Estado;
- VII. La Comisión Estatal de Derechos Humanos;
- VIII. El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y
- IX. Una persona representante de las asociaciones civiles, cuyo fin sea la prevención y atención de la violencia familiar; la cual será designada entre ellas mismas.

ARTICULO 19. El Consejo Estatal contará con un Secretario Técnico, que será el Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, quien tendrá a su cargo la organización interna del mismo, de acuerdo con las siguientes atribuciones:

- I. Suplir las ausencias temporales del Presidente;
- II. Resguardar las actas que se levanten con motivo de las sesiones del Consejo Estatal;
- III. Informar al Consejo Estatal del cumplimiento de sus acuerdos;
- IV. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo Estatal;
- V. Desempeñar las funciones que le encomiende el Consejo Estatal, y
- VI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

ARTICULO 20. El Consejo Estatal deberá sesionar cuando menos bimestralmente; y será convocado por su Secretario Técnico, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación.

La convocatoria contendrá la orden del día de la sesión; para que exista quórum bastará que asistan el Presidente y la mayoría de los consejeros acreditados; los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

De cada sesión del Consejo Estatal se levantará el acta correspondiente, que deberá ser firmada por quienes hayan asistido a la misma.

El Consejo Estatal podrá celebrar reuniones extraordinarias, a solicitud del Presidente o por lo menos de tres de sus integrantes; debiendo citar en estos casos el Secretario Técnico.

ARTICULO 21. El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Elaborar el Programa Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, en el cual se establecerán las políticas, estrategias, acciones y medidas adecuadas, para la prevención y atención de la violencia familiar, cuyos programas se integrarán al Plan Estatal de Desarrollo;
- II. Evaluar el desarrollo del Programa Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y, en su caso, formular observaciones que serán obligatorias, a las dependencias, entidades, centros e instituciones, para el cumplimiento de esta Ley;
- III. Rendir un informe público anual sobre el cumplimiento de sus objetivos;
- IV. Fomentar campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la población, sobre las formas para prevenir y combatir la violencia familiar, en coordinación con los organismos competentes;
- V. Proponer la creación de albergues de atención inmediata a las personas receptoras de violencia familiar, y procurar que cuenten con las medidas de seguridad necesarias;
- VI. Gestionar la obtención de recursos para el cumplimiento de esta Ley;
- VII. Proponer la creación de Unidades de Atención;
- VIII. Coordinar a las autoridades e instituciones facultadas por la ley, que por la propia naturaleza de sus funciones, sean afines a la materia de violencia familiar, y
- IX. Las demás que le señalen los ordenamientos legales aplicables en la materia.

ARTICULO 22. Los representantes de las personas que integran el Consejo Estatal, deberán tener conocimiento en materia de violencia familiar, y mantener continuidad en su participación, a efecto de lograr una permanente representatividad que permita dar puntual seguimiento a las acciones desarrolladas por el Consejo Estatal.

ARTICULO 23. El Consejo Estatal podrá convocar a sus sesiones, a personas con experiencia en la materia, representantes de instituciones gubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil; quienes tendrán derecho a voz.

CAPITULO II **Del Programa Estatal para la Prevención y Atención** **de la Violencia Familiar**

ARTICULO 24. El Programa Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia familiar contendrá, cuando menos, lo si-

guiente:

I. El diagnóstico de la situación existente en el Estado, en materia de violencia familiar;

II. Las estrategias de atención educativa y social para la prevención y combate de la violencia familiar;

III. Los mecanismos para desarrollar una cultura de respeto a los derechos humanos, a los valores familiares y cívicos;

IV. Las acciones para difundir entre la población, la legislación existente sobre el derecho de toda persona a una vida libre de violencia, y la protección a los derechos humanos y a la familia; así como las acciones inmediatas para la atención a los receptores y generadores de la violencia familiar;

V. Los convenios de coordinación con instituciones públicas y privadas, a fin de que participen en acciones de sensibilización, para la atención y capacitación en los casos que se presenten derivados de violencia familiar;

VI. Acciones de difusión para la prevención de la violencia familiar, dirigidas a las personas que asistan a hospitales públicos y privados, regionales y centros de salud municipales, y

VII. Las demás propuestas que acuerde el Consejo Estatal.

ARTICULO 25. El Programa Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, se revisará y actualizará cada año, con la aprobación de la mayoría de los integrantes que hayan asistido a la respectiva sesión del Consejo Estatal.

CAPITULO III **De las Unidades de Atención**

ARTICULO 26. Los ayuntamientos, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, contarán al menos con una Unidad de Atención, como órgano especializado para desarrollar los esquemas y modelos preventivos y de atención, que permitan sensibilizar a la comunidad para erradicar conductas violentas al interior del núcleo familiar, que perjudiquen la integridad de cualquiera de sus miembros. Dichas unidades de atención se ajustarán normativamente, a los lineamientos que en materia de violencia familiar, señalen el Consejo Estatal, y la PRODEM.

ARTICULO 27. Las Unidades de Atención estarán encargadas de la prevención de la violencia familiar; de la promoción de la cultura de la denuncia; y proporcionarán apoyo jurídico a las personas receptoras de violencia familiar; así como psico-social y terapéutico a generadores y receptores de la violencia familiar.

ARTICULO 28. Las Unidades de Atención contarán, preferentemente, con:

I. Dirección;

II. Area de trabajo social;

III. Area de servicios médicos;

IV. Area de servicios jurídicos;

V. Area de atención psicológica, y

VI. Espacios para el albergue temporal y atención de las personas receptoras de violencia familiar, quienes podrán ser auxiliadas por instituciones públicas o privadas.

ARTICULO 29. Las Unidades de Atención tendrán las siguientes atribuciones:

I. Promover y operar los programas de prevención y atención a la violencia familiar en el ámbito municipal, aprobados por el Consejo Estatal;

II. Conocer del procedimiento de conciliación que establece la presente Ley;

III. Asistir a las personas y familias generadoras y receptoras de la violencia familiar, para detectar, canalizar a las instancias competentes y brindar los servicios que en cada caso procedan;

IV. Aplicar y desarrollar los modelos que se instrumenten, para la orientación integral de las personas receptoras y generadoras de violencia familiar;

V. Canalizar a las personas receptoras de violencia familiar que requieran atención médica, a las clínicas o centros hospitalarios;

VI. Investigar y, en su caso, dictaminar sobre la existencia de cualquier acto que implique violencia familiar, en contra de cualquier integrante del núcleo familiar, y en caso de ser procedente, lo hará del conocimiento del Ministerio Público;

VII. Remitir a la autoridad administrativa o jurisdiccional competente, la información que le sea solicitada y que haya sido de su conocimiento en lo relativo a la violencia familiar;

VIII. Emitir las opiniones que le requiera la autoridad administrativa o jurisdiccional, en asuntos relativos a violencia familiar;

IX. Llevar el control y registro estadístico de los casos de violencia familiar, y darlo a conocer trimestralmente al Consejo Estatal, para la generación de las acciones que incidan en la superación de la problemática de la violencia familiar en la comunidad;

X. Promover la participación de las instituciones públicas, privadas y de los particulares de su municipio, con el fin de prevenir las conductas violentas al interior del núcleo familiar, en beneficio de la población vulnerable;

XI. Coordinar acciones con las instituciones de asistencia pública y privada, para proporcionar albergue temporal a las personas receptoras de violencia familiar, y

XII. Las demás que se deriven de ésta y de otras disposiciones

legales aplicables.

ARTICULO 30. Las Unidades de Atención contarán con un sistema de comunicación telefónica para situaciones de violencia familiar, a través del cual todas las personas e instituciones podrán reportar los casos de que tengan conocimiento, durante las veinticuatro horas, todos los días del año.

TITULO TERCERO DE LAS ACCIONES PUBLICAS

CAPITULO I Disposiciones Comunes

ARTICULO 31. Las autoridades involucradas en materia de violencia familiar, a las que alude este Título, además de las funciones que les son propias, llevarán a cabo las que esta Ley les atribuye, a cuyo efecto deberán presentar conforme a sus obligaciones, y cuando así lo requiera el Consejo Estatal, las acciones, diagnósticos, evaluaciones y avances en la prevención y atención en materia de violencia familiar, con la finalidad de que se hagan las sugerencias pertinentes.

ARTICULO 32. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, las autoridades e instituciones involucradas en materia de violencia familiar, dispondrán y programarán las acciones necesarias, con sus propias estructuras administrativas, operativas y recursos humanos.

CAPITULO II De la Atención en Materia de Violencia Familiar

ARTICULO 33. La atención en materia de violencia familiar estará libre de prejuicios, estereotipos, y prácticas sociales y culturales basadas en la inferioridad, subordinación o discriminación; y su objeto es la protección de la integridad física y mental de los receptores y generadores de violencia, y la atención de los demás miembros de la familia.

ARTICULO 34. Los modelos psicoterapéuticos se orientarán a la atención de las personas receptoras y generadoras de violencia familiar, con un enfoque integral que tienda a eliminarla.

ARTICULO 35. El personal de las Unidades de Atención deberá ser seleccionado, a fin de contar con el perfil y aptitudes requeridas para brindar tratamiento adecuado en los casos de violencia familiar; sus atribuciones y funciones estarán previstas en su reglamento interior.

TITULO CUARTO DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO I Generalidades

ARTICULO 36. Las Unidades de Atención serán las competentes para conocer de los hechos en materia de

violencia familiar, así como dar seguimiento al trámite y solución de esos conflictos, incluso en la vía de conciliación.

ARTICULO 37. Las Unidades de Atención dictarán y aplicarán las medidas que estimen necesarias, para atender la garantía de protección de la persona receptora de la violencia familiar, sin que sea indispensable la audiencia de parte contraria, lo cual podrán hacer directamente, o a través de gestiones con organismos e instituciones que los presten; dichas medidas se pondrán de inmediato conocimiento de la autoridad competente, quien determinará lo conducente.

La facilitación de servicios de atención, no exime al padre, a la madre, o a la persona responsable de resguardar los derechos de las personas afectadas, de sus deberes de cuidado, y de garantizar el bienestar de los mismos.

ARTICULO 38. En la tramitación del procedimiento en materia de violencia familiar, rigen los principios de legalidad, imparcialidad, gratuidad, reserva, breve trámite y oralidad; privilegiando el principio de conciliación.

El procedimiento se iniciará inmediatamente, cuando por cualquier medio se tenga conocimiento de un hecho constitutivo de violencia familiar.

A petición de parte se inicia cuando la persona receptora y generadora de violencia familiar, solicita la instauración del procedimiento.

ARTICULO 39. Las evidencias que la autoridad investigadora recabe en el lugar de los hechos de violencia familiar, o las fotografías que se tomen de las áreas de trauma de la víctima, y los exámenes y pruebas de laboratorio, se recogerán tratando en lo posible de que no afecten al receptor de la violencia familiar, ni atenten contra su dignidad, y se remitirán a la autoridad que tome a su cargo el conocimiento del caso.

Estas evidencias también podrán ser utilizadas para iniciar, en su caso, procesos civiles o penales por violencia familiar, a petición de parte y previa comprobación del interés jurídico.

ARTICULO 40. Quienes tienen a su cargo la investigación o estén conociendo de un proceso de violencia familiar, podrán entrevistar directamente a las personas de las que tengan conocimiento, o sospechen que han sido receptoras de violencia familiar, previa su autorización, en el lugar en que éstas se encuentren, siempre y cuando esté garantizada su seguridad.

Los menores de edad podrán ser citados a fin de recabar su opinión; en caso de ser necesario, la Unidad de Atención solicitará el apoyo de la autoridad competente, con la debida intervención del Ministerio Público.

ARTICULO 41. Las diligencias sobre notificaciones y citatorios podrán practicarse personalmente, por conducto del servidor público autorizado de las Unidades de Atención, o por la policía Estatal, Ministerial o municipal, y según las circunstancias podrá efectuarse por correo, telégrafo u otro medio, previa

constancia razonada del medio empleado.

CAPITULO II

Medidas de Protección Inmediata y Cautelares

ARTICULO 42. Quien dirija una institución de salud pública, privada, o una escuela, deberá asumir la protección de toda persona, cuando tenga motivo razonable para creer que ésta ha sido receptora de violencia familiar, lo cual hará de inmediato conocimiento a la Unidad de Atención o a la autoridad competente, la que acordará lo conducente.

ARTICULO 43. La autoridad competente podrá decretar de oficio, o a petición de parte, las siguientes:

I. Medidas de protección inmediata:

a) El depósito de la persona receptora de la violencia familiar en un albergue o domicilio, que garantice su integridad personal, en cuyo caso deberá contarse con la anuencia de la persona que asuma tal responsabilidad.

b) Prohibición al generador de la violencia de acercarse al domicilio donde se encuentra en depósito, lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro que frecuente la persona receptora de violencia.

c) Reingreso de la persona receptora de la violencia familiar a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

d) Prohibición a la persona generadora de violencia, de intimidar o molestar a la persona receptora de violencia en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.

Las medidas de protección inmediata tendrán una temporalidad no mayor de setenta y dos horas, y deberán expedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes, al conocimiento de los hechos que las generan, y

II. Medidas cautelares:

a) La suspensión temporal al generador de la violencia familiar, del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes.

b) El embargo preventivo de bienes de la persona generadora de la violencia, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias.

c) La obligación de proporcionar alimentos de manera provisional e inmediata.

Las medidas cautelares serán tramitadas ante los juzgados de lo Familiar; y en los lugares en que no los hubiere, ante los juzgados civiles de Primera Instancia, Mixtos o Menores.

ARTICULO 44. Los juzgados competentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la PRODEM, y las Unidades de Atención, fin de prevenir la repetición de los hechos, deberá canalizar a las personas receptoras de violencia familiar, a los

organismos competentes, para que reciban atención psicoterapéutica y de rehabilitación.

ARTICULO 45. Las Unidades de Atención proveerán de servicios de protección, directamente a los menores, mujeres, personas con capacidades diferentes o de la tercera edad, que estén en riesgo inminente de ser víctimas de la violencia familiar, y no tengan domicilio o persona que se haga cargo de su cuidado, o promoverán contratos, o acuerdos con organismos e instituciones que los presten.

CAPITULO III

Del Procedimiento ante las Unidades de Atención

ARTICULO 46. Las Unidades de Atención son las encargadas de canalizar a las personas receptoras y generadoras de violencia familiar, a las instituciones especializadas en el tratamiento que se requiera, para superar las secuelas físicas y psico-emocionales originadas por la violencia.

ARTICULO 47. Cuando la Unidad de Atención tenga conocimiento de un caso de violencia familiar, ya sea en forma anónima o directa, deberá canalizarlo a trabajo social, donde se determinará si se requiere apoyo jurídico o psicológico. En los casos que resulten procedentes, se brindará asesoría al receptor de la violencia familiar, para promover la denuncia ante el Ministerio Público.

ARTICULO 48. Tratándose de menores, se realizarán las investigaciones de trabajo social necesarias, y una vez que se acrediten elementos que hagan presumir la existencia de la violencia familiar, se turnará de inmediato al Ministerio Público, por la presunta comisión del delito.

ARTICULO 49. Cuando resulte procedente la conciliación, se proporcionará atención jurídica citando a las partes, a fin de establecer las condiciones necesarias que permitan definir los derechos y obligaciones, así como los acuerdos posibles que surjan sobre el problema concreto.

ARTICULO 50. La atención psicológica se proporcionará a los generadores y receptores de violencia familiar, conforme al programa terapéutico aprobado por el Consejo Estatal.

ARTICULO 51. Las funciones del personal de las Unidades de Atención, serán determinadas en el Reglamento Interior y en las disposiciones legales municipales aplicables.

ARTICULO 52. El procedimiento al que se refiere este Capítulo se inicia en forma verbal o por escrito. Las Unidades de Atención deberán iniciar de inmediato, el procedimiento correspondiente, para que en un término no mayor de cuarenta y ocho horas, puedan citar a las siguientes personas:

I. El receptor de la violencia familiar;

II. El generador de la violencia familiar;

III. Cualquier miembro de la familia, y

IV. Las que con motivo de su actividad detecten cualquier

circunstancia, que haga presumible la existencia de hechos que constituyan violencia familiar.

Los menores de edad también podrán ser citados a fin de recabar su opinión.

ARTICULO 53. Recibido el conocimiento de hechos, el especialista de la Unidad de Atención que se ocupe del caso, invitará al compareciente y a la otra parte involucrada en el conflicto, a una sesión en la que les explicará los fines del procedimiento para solucionar el conflicto por vía de conciliación.

Si cualquiera de las partes no comparecen al segundo citatorio que se fije para la sesión, se levantará el acta respectiva y se archivará el expediente; entendiéndose que se niegan a la conciliación.

En caso de que se tenga conocimiento de conflictos o conductas de violencia que constituyan delito que se persigue de oficio, dará inmediato conocimiento a la autoridad competente.

ARTICULO 54. Las Unidades de Atención deberán dar trato confidencial a la información o documentación de las personas atendidas. Lo anterior implica que el expediente en el que se integren las constancias relativas al planteamiento y a la resolución del problema, sólo podrá ser consultado por quienes intervengan en ellos, sus apoderados, y el Consejo Estatal, al que se le deberán mandar los informes a que se refiere esta Ley; no podrán ser utilizados como medios de prueba en otros juicios, ni los conciliadores podrán ser compelidos a declarar como testigos.

ARTICULO 55. El procedimiento de la conciliación se llevará a cabo preferentemente en no más de dos audiencias.

ARTICULO 56. En las audiencias de conciliación, la persona conciliadora propondrá el acuerdo entre las partes mediante alternativas; y les hará saber las consecuencias en caso de continuar con el conflicto.

Una vez que las partes lleguen a una conciliación, se suscribirá el convenio correspondiente.

ARTICULO 57. En los casos en que se considere que una persona es generadora de violencia familiar, se podrá establecer en los convenios, que ésta se someterá al programa de terapia familiar aprobado por el Consejo Estatal.

El término de los programas, previa evaluación de la Unidad de Atención, se fijará tomando en consideración los resultados de las terapias.

ARTICULO 58. Las personas que se consideren afectadas por los actos derivados de la aplicación de este Ordenamiento, podrán recurrirlos en los términos de ley.

ARTICULO 2º. Se **REFORMA** el segundo párrafo del artículo 177 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTICULO 177. ...

Este delito se sancionará con pena de uno a seis años de prisión y sanción pecuniaria de 160 a 200 días de salario mínimo; asimismo, el culpable perderá el derecho de pensión alimenticia y se le sujetará a tratamiento psicológico adecuado.

...

ARTICULO 3º. Se **REFORMA** las fracciones V y VI; y se **ADICIONA** la fracción VII, todas de y al artículo 404 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTICULO 404. ...

I. a IV. ...

V. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la víctima sea el menor;

VI. Cuando el que la ejerza sea condenado por dos o más veces por delito grave, y

VII. En los casos que los padres sean condenados por la comisión de un delito de violencia familiar, y en los resultados de los estudios de peligrosidad, ésta sea superior a la media.

ARTICULO 4º. Se **REFORMA** el inciso c) de la fracción III; y el inciso d) de la fracción IV, ambas del artículo 6º. Y se **ADICIONA** la fracción V al mismo artículo 6º, de y a la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

ARTICULO 6º. ...

I. a II. ...

III. ...

a) y b) ...

c) Los adultos mayores;

IV. ...

a) a c) ...

d) Los indigentes, y

V. Las que se encuentren en situación de violencia familiar.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor, noventa días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se aboga la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Estado de San Luis

Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 28 de julio de 1998.

TERCERO. El Consejo Estatal y las Unidades de Atención deberán quedar instalados dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, a que alude el artículo 1º. del presente Decreto.

CUARTO. Treinta días después de la instalación de las Unidades de Atención, el Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, formulará el Reglamento Interior, para someterlo a la aprobación del Consejo Estatal.

QUINTO. En los municipios en los que hubiere Centros de Atención Integral a la Violencia Familiar, las Unidades de Atención asumirán las funciones y todos los asuntos relativos que a aquéllos les compete.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, el veintinueve de junio de dos mil siete.

Diputada Presidenta: Victoria Amparo Labastida Aguirre, Diputada Primera Secretaria: Sonia Mendoza Díaz, Diputada Segunda Secretaria: Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, (Rúbricas)

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

D A D O en el Palacio de Gobierno, Sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los cinco días del mes de julio de dos mil siete.

C.P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

DECRETO 198

LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, DECRETA:

UNICO. La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, clausura hoy, treinta de junio de dos mil siete, el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio legal.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, el treinta de junio de dos mil siete.

Diputada Presidenta: Victoria Amparo Labastida Aguirre, Diputada Primera Secretaria: Sonia Mendoza Díaz, Diputada Segunda Secretaria: Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, (Rúbricas)

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

D A D O en el Palacio de Gobierno, Sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los cinco días del mes de julio de dos mil siete.

El Gobernador Constitucional del Estado

El Gobernador Constitucional del Estado

C.P. Marcelo de los Santos Fraga
(Rúbrica)

C.P. Marcelo de los Santos Fraga
(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

El Secretario General de Gobierno

Lic. Alfonso José Castillo Machuca
(Rúbrica)

Lic. Alfonso José Castillo Machuca
(Rúbrica)